

■ SUSTITUCION DE CULTIVOS DE DROGAS

■ PENDIENTE: REFORMA LABORAL

BID AMÉRICA

Revista del Banco Interamericano de Desarrollo

Enero-Febrero 1998



Los nuevos árbitros

**Cuando chocan los intereses
de empresas y consumidores,
los reguladores suben al ring**

Beatriz Boza, defensora
de la competencia y la
propiedad intelectual
en Perú

PUNTOS DE VISTA

3 Pendiente: reforma laboral

ENFOQUE

4 Los nuevos árbitros

Reguladores vigilan los mercados

6 El precio de la autonomía

NOTICIAS

8 Cartagena multifacética

9 Préstamos del BID: nuevas prioridades

10 Desempleo: una solución juvenil

EL BANCO EN ACCION

11 Costa Rica abre centro tecnológico

“Deben preguntarse si quieren cultivar drogas o seguir siendo indígenas”

Antropólogo
César Perafán-Simmonds



Con políticas apropiadas, los indígenas dejarán de sembrar cultivos ilícitos. Ver página 12.

IDEARIO

12 Nuevas formas de erradicar drogas

12 Sinceridad financiera

CIFRAS QUE HABLAN

13 Gobiernos centrales optan por delegar

PROYECTOS

14 Progresos
Mejores lugares para estudiar en Guyana

14 Nuevos proyectos
Alianza pública y privada

14 Créditos recientes
Hidroelectricidad en Brasil, infraestructura municipal en Colombia, fondos para viviendas de bajo costo en Ecuador.

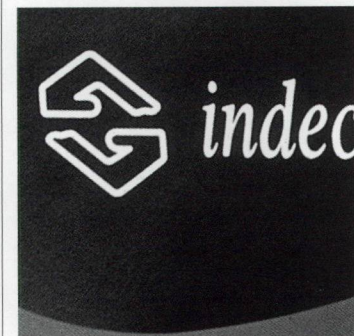
EXPRESIONES

16 Un tardío florecer

PORTADA

Los nuevos árbitros. Como titular de Indecopi, entidad del gobierno peruano encargada de aplicar las leyes de competencia justa, protección al consumidor y propiedad intelectual, Beatriz Boza contribuye a resolver conflictos inevitables en economías de mercado entre consumidores, productores y el gobierno. El éxito de Indecopi depende de que su personal esté aislado de presiones políticas y financieras. Ver página 6.

—Foto BID de David Mangurian



LIBRETA DE APUNTES

Cartagena, puerto emprendedor

COMO TODOS LOS QUE VISITAN Cartagena, los delegados que asistan a la reunión anual del BID en marzo quedarán fascinados con las vistas del Caribe.

Probablemente también noten su ajetreado puerto, situado en la isla de Manga. En un día típico, está colmado de barcos de todo el mundo, evidencia del creciente papel de Cartagena como punto de trasbordo de mercaderías.

El puerto de Cartagena, así como los otros tres puertos marítimos de Colombia, ha sido revitalizado por un innovador programa que lanzó el gobierno colombiano en 1991. Con el objetivo de acabar con el monopolio del estado en la administración portuaria, el gobierno ofreció a empresas privadas concesiones de 20 años para modernizar, administrar y operar los puertos.

Desde que obtuvo la concesión en una subasta pública en 1993, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A.

(SPRC) se ha embarcado en un ambicioso programa orientado a transformar a Cartagena de puerto de cargas generales en terminal para contenedores. La SPRC ya tiene en operaciones dos grúas para contenedores y ahora planea adquirir algunos más y otros equipos con capacidad para mover hasta 200.000 contenedores anuales. Asimismo planea extender sus muelles y profundizar el puerto para poder acomodar enormes barcos que puedan transportar entre 1.500 y 3.000 contenedores cada uno.

La expansión costará 31 millones de dólares, una suma intimidante para una empresa con 200 empleados e ingresos de alrededor de 25 millones de dólares en 1996. Pero el desempeño de la SPRC ha sido notable, y ha atraído la atención de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII)



Barcos de todo el mundo.

del BID, que en noviembre acordó prestarle ocho millones de dólares.

“Es una compañía fuerte, con un cuerpo gerencial excelente, un sólido plan de negocios y buenos antecedentes en materia ambiental, de seguridad laboral y de vigilancia”, explicó Jorge Roldán, economista jefe de la CII. “Estas inversiones resultarán en entregas más rápidas y costos de transporte más bajos para las empresas colombianas, y nos entusiasma participar en este emprendimiento”.

BIDAMERICA Volumen 25 No. 1-2

EDITOR: Roger Hamilton

EDITORES ASOCIADOS:

Paul Constance, Peter Bate

EDITORIA ADJUNTA: Claudia Estrada

EDITORIA ON-LINE:

Iris del Carpio

DISEÑADORA: Cecilia Jacobson

EDITOR FOTOGRAFICO:

David Mangurian

FOTOGRAFOS: Willie Heinz,

Luis Portillo

BIDAMERICA cubre las tendencias del desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe y las actividades del Banco Interamericano de Desarrollo. Se publica 10 veces al año en castellano e inglés.

Las versiones electrónicas de **BIDAMERICA**, editadas en inglés, castellano, francés y portugués, aparecen en la dirección de Internet <http://www.iadb.org>. Todo el material allí incluido puede ser reproducido si se lo atribuye a **BIDAMERICA** o al **BIDAMERICA ON-LINE**.

¿Comentarios? Por favor envíelos a nuestra sección editorial, ya sea por correo electrónico a editor@iadb.org o a la dirección que aparece al pie de esta columna.

Puede solicitarse suscripciones gratuitas a **BIDAMERICA** a la librería de BID: IDB Bookstore E-0105, Office of External Relations, 1300 New York Ave, N.W., Washington, D.C., 20577, USA. Tel : (202) 623-1753, Fax (202) 623-1709. Correo electrónico: idb-books@iadb.org.

“¿Cómo es que nadie está querellando a las agencias calificadoras de riesgo crediticio?”

Rudiger Dornbusch, economista del Massachusetts Institute of Technology, en la sede del BID, el 2 de enero. Dornbusch denunció que agencias privadas como Moody's y Standard & Poor's no advirtieron con suficiente antelación a los inversores sobre debilidades de empresas y bancos en Asia antes de que estallara la reciente crisis financiera.

“Por cada prestatario imprudente, hay un prestamista imprudente”.

Jeffrey Sachs, economista de la Universidad de Harvard, citado en The New York Times del 18 de diciembre de 1997. Sachs refutó que la responsabilidad por la crisis financiera en Asia recaerá sólo en empresas que tomaron demasiado crédito.

“Estos piratas modernos son más nefastos que los (conquistadores) españoles en su búsqueda de oro”.

El arqueólogo peruano Walter Alva, citado en el Miami Herald del 18 de enero, en un artículo sobre el intenso tráfico de artefactos precolombinos robados del Perú.

“Este año el presupuesto fue un proceso político”.

Rogelio Sada Zambrano, diputado mexicano, citado en el Washington Post del 18 de diciembre de 1997. Zambrano se refería a las negociaciones y compromisos en torno al presupuesto nacional ahora que el gobernante Partido Revolucionario Institucional ya no tiene mayoría en la cámara baja.

“Podremos gastar esos recursos en salud y educación”.

El ministro de Planeamiento de Venezuela, Teodoro Petkoff, refiriéndose a los subsidios otorgados a la siderúrgica Sidor, citado en El Globo, del 19 de diciembre de 1997. El día anterior el gobierno venezolano había vendido 70 por ciento del paquete accionario de la empresa estatal a inversores privados.

La pendiente reforma laboral

CUANDO SE TRATA DE CAMBIAR las relaciones entre trabajadores y empleadores, los debates en São Paulo o Managua suenan muy parecidos a los que pueden escucharse en París o Nueva York. Tanto en el mundo industrializado como en los países en desarrollo, los argumentos son conocidos: los trabajadores quieren seguridad laboral, mejores beneficios, salarios más altos. Las empresas demandan más flexibilidad para contratar, despedir y pagar, especialmente ahora que la globalización está convirtiendo a los costos laborales en un componente más decisivo de la competitividad.

En América Latina, como en buena parte del mundo, el debate en torno a la reforma laboral adquiere especial intensidad por recuerdos no muy distantes de la dura lucha por asegurar derechos laborales básicos, derechos que comprensiblemente los trabajadores se empeñan en preservar. Por eso, como dijo recientemente el presidente del BID, Enrique V. Iglesias, la modernización del mercado laboral es todavía una “tarea pendiente” en prácticamente todos los países de la región.

Hablando ante un grupo de ministros de trabajo de países centroamericanos en la sede del Banco en noviembre, Iglesias reconoció que los esfuerzos por mejorar las leyes laborales existentes (incluyendo algunos intentos promovidos por el BID) frecuentemente han provocado fuertes reacciones. Iglesias afirmó que el BID no desea un retorno al “capitalismo salvaje” del pasado. Tampoco insta a “sepultar las conquistas sociales” logradas por los trabajadores, sino más bien a “extender esos resguardos a la sociedad en general, particularmente al 30 ó 40 por ciento de la fuerza laboral que trabaja en el sector informal”.

El BID nunca ha tenido una receta única para los temas laborales en la región. Reconociendo que cada país tiene su propia tradición jurídica y que las solu-

ciones duraderas a los problemas del mercado laboral deben surgir de un consenso genuino, el Banco ha optado por promover diálogos entre dirigentes sindicales, empresas, gobiernos y, cada vez más, una variedad de entidades cívicas que representan a los trabajadores del sector informal y a los desempleados.

Esos diálogos, a menudo llamados concertaciones, no son una panacea. Pero en países tan diversos como Alemania, Italia y Chile han servido para superar trabas políticas al crear un marco dentro del cual es posible negociar productivamente.

El Banco está comprometido a apoyar a los dirigentes sindicales y aprender de ellos. Desde hace dos años el BID ha estado financiando un programa co- auspiciado por la Organización Regional Interamericana de Tra-

bajadores y el Congreso Caribbeño del Trabajo para capacitar a 252 dirigentes sindicales de toda la región en economía laboral y el impacto de la globalización en las políticas laborales. Cada semestre, universidades de Brasil, Chile, Costa Rica y Jamaica ofrecen los cursos de tres semanas de duración.

El Banco se prepara ahora a recibir dirigentes sindicales de países de la región para un encuentro en Washington. Los invitados serán recibidos por el presidente Iglesias, discutirán sus inquietudes con especialistas del BID y esclarecerán las ideas que tiene el Banco sobre las negociaciones actuales entre trabajadores y empleadores en América Latina. En el número de abril de esta revista habrá información sobre el encuentro.

—Los editores



DAVID MANGUIRIAN-BID

■ **Los trabajadores defienden conquistas que demoraron décadas en conseguir** ■

Nuevos árbitros

Reguladores independientes velan porque se juegue limpio en los mercados

Por PAUL CONSTANCE

CUANDO EL GOBIERNO ARGENTINO ANUNCIÓ a comienzos de esta década que le vendería la empresa nacional de teléfonos a inversores privados, Néstor Vázquez, un psicólogo de Buenos Aires, tenía algunas preocupaciones.

“Quería saber quién aseguraría que la demora para conseguir una nueva línea de teléfono sería menor con los nuevos dueños”, recuerda Vázquez. También se preguntaba si los operadores privados podrían aumentar tarifas a su antojo y si el viejo monopolio público sería simplemente reemplazado por un monopolio privado.

Esas inquietudes son típicas entre quienes han sido testigos de la transferencia masiva de servicios del sector público a manos privadas que ha ocurrido en muchos países de América Latina y el Caribe en años recientes. Ya sea la privatización de teléfonos, o servicios de electricidad, gas, transporte, agua corriente o de la administración de fondos de pensiones, la pregunta suele ser la misma: ¿quién asegurará que los nuevos propietarios no se aprovecharán de los consumidores?

Los temores no son enteramente infundados. Después de todo, muchos países habían estatizado esos servicios hace décadas, invocando como fin la defensa de los consumidores o el interés nacional. Esos justificativos dieron pie a controles estatales sobre toda suerte de productos y servicios, desde el precio del pan hasta las tasas de interés y el monto de las jubilaciones.

Pero los consumidores no son los únicos que defienden sus intereses cuando el gobierno transfiere un servicio al sector privado. Las empresas privadas, particularmente aquellas que asumen el riesgo de

hacerse cargo de esos servicios, tienen interés en saber quién les asegurará que podrán manejar su negocio y recuperar su inversión sin mucha intervención del gobierno.

Nuevas reglas, nuevas autoridades. Cada vez más empresas y consumidores en América Latina reciben respuestas a esas preguntas de reguladores independientes. Como los árbitros de un partido de fútbol, los reguladores vigilan la actividad empresarial y aseguran que quienes participan respeten las reglas del juego. Al hacerlo, deben equilibrar los intereses conflictivos de empresas, consumidores y del propio gobierno.

■ ¿Quién asegura que los operadores privados no se aprovechen de los consumidores? ■

En las economías dirigidas es raro que haya reguladores independientes, y si los hay suelen ser irrelevantes. El estado fija precios y normas de calidad para los bienes y servicios que produce; hay poca competencia y, por lo tanto, poca necesidad de árbitros. Las decisiones

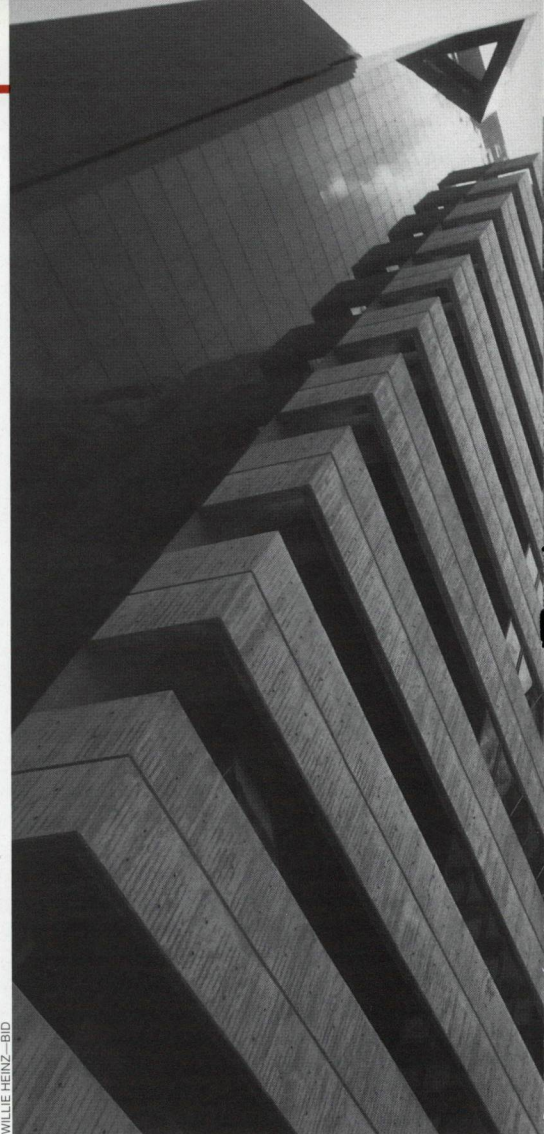
claves en materia regulatoria se toman a puerta cerrada, y las empresas y los consumidores quedan al margen del proceso.

En muchos países la herencia de ese método ha sido una maraña de normas incongruentes o contradictorias. Esa incertidumbre ha tenido un efecto devastador en la inversión a largo plazo del sector privado porque las empresas saben que un cambio repentino de reglas puede arruinar años de esfuerzos y gastos. “Cuando los precios y tarifas de los servicios públicos son fijados por el estado, es prácticamente imposible atraer inversión privada”, afirma Claude Besse, superintendente general del Sistema General de Regulación Sectorial de Bolivia. “Nosotros creemos que uno de los factores fundamentales en el éxito de Bolivia en atraer capital de inversión en años recientes fue la creación de un marco regulatorio claro, pre-

ciso y coherente que no es susceptible al manoseo político”.

Claudia Piras, una economista del BID que está estudiando los mecanismos de regulación en la región, coincide. “Las regulaciones confiables son una condición crucial para las empresas que están considerando invertir en sectores donde hay un gran costo inicial inmovilizado a recuperar en el curso de muchos años”, explica. “Esas empresas necesitan tener la seguridad de que el gobierno no renegociará contratos arbitrariamente o decretará reducciones de tarifas después que se hayan hecho las inversiones”.

Calmando a los inversores. Para ganarse la confianza de empresas y atraer a inversores, los gobiernos de la región han estado simplificando y modernizando leyes y regulaciones que afectan a sectores específicos de la actividad económica. A medida que ponen en venta empresas estatales, la mayoría de los países ha creado nuevas entidades regulatorias y les ha dado autoridad sin precedentes para vigilar los servicios privatizados. Antes de transferir al sector privado su sistema eléctrico, por ejemplo, Bolivia creó un marco legal y regulatorio para la competencia y nombró un “regulador sectorial” para

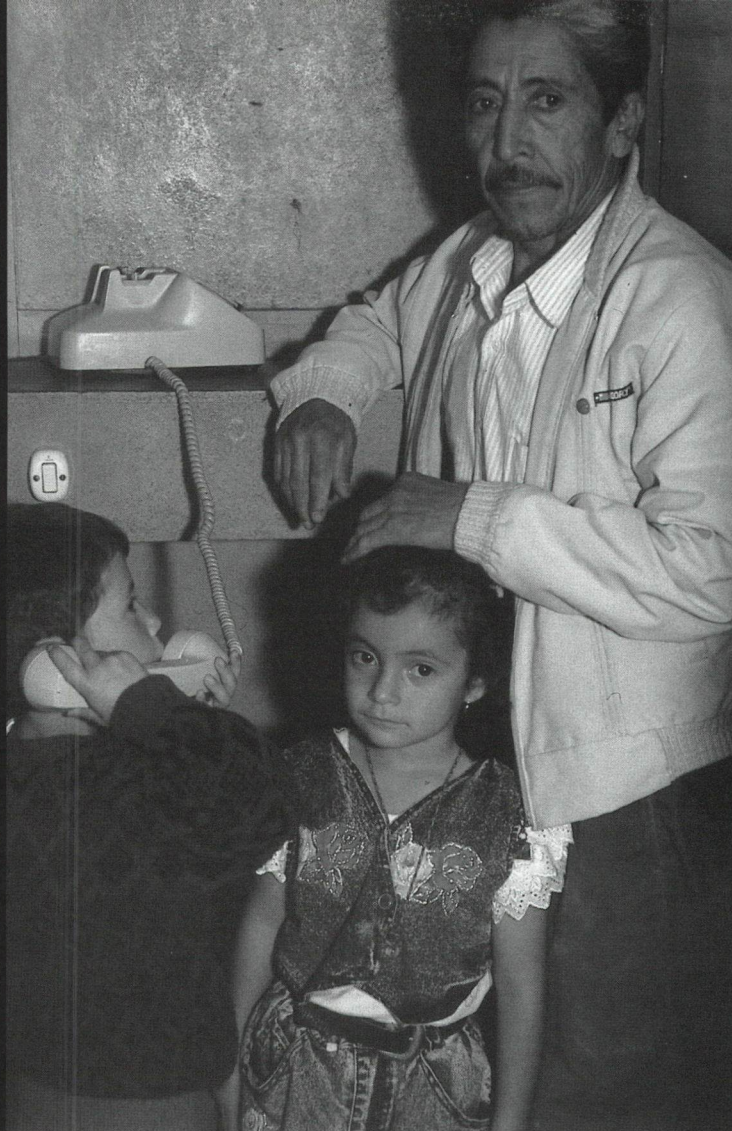


WILLIE HEINZ - BID

**Los consu-
midores se
quejan de que
un aumento
propuesto de
tarifas telefó-
nicas es excesi-
vo e injusto**

**◀ Las empre-
sas telefónicas
sostienen que
el incremento
es necesario
para financiar
nuevos servi-
cios y lograr
ganancias**

**Los regulado-
res tienen el
trabajo nada
envidiable de
encontrar el
justo medio
entre las
empresas y sus
clientes**



DAVID MANGUHAN-BID

hacer cumplir esas nuevas reglas.

Aunque las empresas de servicios públicos privatizadas son el área más visible de fiscalización autónoma, los reguladores están tomando papeles decisivos en otros sectores. Para evitar quiebras bancarias y crisis en el sector financiero, muchos gobiernos latinoamericanos están fortaleciendo los entes reguladores de la banca, las bolsas de valores y las empresas de seguros. A menudo conocidos como superintendentes, estos reguladores hacen cumplir leyes que previenen desde préstamos bancarios motivados por razones políticas hasta la malversación de fondos de inversores por parte de corredores de bolsa o directivos de empresas. Los países que han privatizado total o parcialmente sus sistemas de seguridad social han creado oficinas reguladoras para velar, entre otras cosas, por que quienes administran los aportes de los trabajadores no tomen riesgos inaceptables con dinero destinado a futuras pensiones.

En algunos países hasta la protección ambiental ha sido fortalecida mediante reguladores independientes. En Chile las empresas industriales deben presentar estudios de impacto ambiental de sus proyectos a la Comisión Nacional del Medio Ambiente

(CONAMA), que puede rechazar estudios y planes que considere deficientes. En los últimos dos años dictámenes desfavorables de la CONAMA han detenido temporalmente varios grandes emprendimientos, demostrando que las leyes ambientales no pueden ser pasadas por alto, ni siquiera por las empresas más poderosas del país.

¿Y los consumidores? Pero los reguladores que mejor ilustran la nueva importancia de la fiscalización independiente en América Latina son probablemente aquellos que vigilan la competencia misma. Aunque las leyes en toda la región han incluido desde hace años normas destinadas a alentar la competencia e impedir la formación de monopolios, esas regulaciones tienen limitada repercusión en economías controladas por el estado. Ahora, la "política de competencia" repentinamente se ha puesto de moda.

Consideremos el ejemplo de los productores de harina en el Perú. Dado que el gobierno tradicionalmente fijaba el precio de la harina, pocos sabían si los molinos harineros competían realmente entre sí. Pero en 1996, tras un súbito aumento en el precio del pan, la entidad reguladora de la competencia comercial en el Perú, Indecopi, co-

menzó a abrigar sospechas. Sus investigaciones revelaron que 10 molinos habían confabulado para aumentar el precio de la harina, una práctica prohibida por las leyes sobre libre competencia. En un hecho insólito para los peruanos, las compañías fueron multadas, protegiéndose el derecho del consumidor de optar entre una variedad de productos horneados con diferentes precios.

Ese papel de mediadores entre empresas y consumidores prácticamente garantiza que los reguladores sean objeto de controversias. Si autorizan un pequeño aumento en las tarifas telefónicas, por ejemplo, probablemente las empresas operadoras protesten que el incremento es insuficiente para lograr ganancias y expansión adecuadas. Al mismo tiempo los consumidores denunciarán ese aumento como un ataque al bolsillo de la clase trabajadora. Hasta el gobierno podría criticar la decisión, particularmente si es anunciada en vísperas de comicios.

Sin embargo, es precisamente esa naturaleza inherentemente polémica la que convierte a la regulación independiente en un elemento necesario para las sociedades democráticas. En el proceso de quejas, investigaciones, dictámenes, apelaciones y protestas que acompañan toda gran decisión regulatoria, los interesados se ven forzados a exponer abiertamente los méritos de sus posiciones y defenderlas contra argumentos en contrario. "Este proceso es mucho más transparente que en el pasado", dice William Savedoff, un economista del BID que estudia las regulaciones de servicios de agua corriente en América Latina. "Antes, nadie sabía quién exactamente estaba a cargo de los servicios de agua o de gas y de qué manera se fijaban sus precios. De manera que había poco que explicar y los sectores más poderosos podían manipular las decisiones para su propio beneficio".

En contraste, un proceso regulatorio efectivo pone al descubierto las intenciones de cada protagonista en una decisión, se trate de empresas, consumidores o el gobierno. También hace más difícil que una de las partes pueda imponer sus designios a las otras. Debido a eso, las entidades reguladoras efectivas pueden hacer mucho por asegurar que los mercados libres operen equitativamente y no benefician excesivamente a las empresas y las élites económicas. Este es un asunto crucial en sociedades que todavía se están ajustando a la libre competencia y donde los beneficios sociales de la privatización tardan en manifestarse.

"La actividad regulatoria eficaz hace que los ciudadanos confíen más en la economía de mercado," dice Beatriz Boza, presidenta del Indecopi en Perú, "porque pueden apreciar que cuando una empresa se aprovecha del consumidor, nosotros somos capaces de imponer sanciones que eventualmente resultan en más opciones y mejores precios". ■

El precio de la autonomía

Los buenos reguladores deben resistir las constantes presiones de partes interesadas

Por PAUL CONSTANCE

BEATRIZ BOZA SABE QUE TIENE ENEMIGOS. Como presidenta de Indecopi, la entidad peruana que defiende la competencia y protege la propiedad intelectual, esta abogada está siempre en la mira de las empresas que investiga.

“Cada vez que ponemos al descubierto una maniobra de concertación de precios por parte de un grupo de empresas o una campaña de publicidad que no es limpia y transparente, recibimos quejas”, dice. Además están los casos aún más delicados que involucran a funcionarios públicos. Como en el caso de la municipalidad de una provincia costera que cobraba ilegalmente por el acceso a una playa pública.

Boza dice que su oficina ha impuesto sanciones muchas veces a entidades de gobierno por actos contrarios a la libre competencia, sin sufrir represalias. La razón, explica, es su ascendrada independencia. “Ningún grupo de interés nos puede capturar”, afirma.

A sólo cinco años de su creación para consolidar funciones regulatorias esparcidas por varios ministerios, Indecopi ha adquirido una reputación de imparcialidad que la hace popular. Según Boza, Indecopi recibe 40.000 quejas anuales formuladas por empresas y consumidores. Las denuncias van desde lo trivial, como una persona molesta porque un par de zapatos de cierta marca se deshizo al mojarse, hasta lo políticamente explosivo, como la alerta de que varias empresas de ómnibus se aprestaban a concertar sus tarifas con la aprobación tácita del Ministerio de Transportes. La resolución exitosa de cada caso depende de la medida en que los funcionarios de Indecopi son percibidos como imparciales e inmunes a presiones políticas y económicas.

En ese aspecto, el trabajo de

Boza es similar al de centenares de otros funcionarios en países de América Latina que están otorgándoles a los entes reguladores independientes una creciente autoridad para mediar en los conflictos entre empresas, consumidores y gobiernos. Sea que supervisan la política de libre competencia, la protección ambiental, las normas sanitarias o las actividades de empresas públicas, bancos o mercados de valores, los reguladores son blanco de intensa gestión por parte de grupos que tienen mucho que ganar o perder con cómo se interprete la ley.



“Somos independientes. Ningún grupo de interés nos puede capturar”.

Beatriz Boza

Los supervisores financieros, por ejemplo, son a menudo atacados por empresas que desean mayor acceso al crédito de bancos nacionales. Pero los inversores extranjeros y los bancos multilaterales de desarrollo generalmente esperan que los supervisores apliquen controles severos para que los bancos no asuman riesgos peligrosos o hagan préstamos cuestionables.

Los reguladores ambientales deben sopesar los intereses de las compañías madereras, que quieren permiso para talar bosques nativos, con los de grupos ecologistas, que piden ampliar las áreas protegidas. En el sector energético, los reguladores están en medio de una constante batalla entre consumidores que desean el precio más bajo posible para el gas natural y las empresas gasíferas que piden tarifas más altas para aumentar sus ganancias y financiar su expansión.

El descontento indica calidad. Cuando se percibe que los reguladores favorecen a un sector sobre otro, a menudo se pone en tela de juicio la justicia misma de la economía de mercado, porque la ciudadanía cree que el juego económico está arreglado a favor de quienes tienen más influencia política y poder financiero. Debido a esto, quienes tra-

bajan en regulación suelen considerar un sello de calidad cuando hay quejas de todos los sectores, porque es evidencia de que hay un equilibrio de los deseos de todas las partes. “Si todos están descontentos y todos protestan por mis decisiones, entonces considero que estoy haciendo un trabajo eficiente”, dice Claude Besse, superintendente general del Sistema General para Regulación Sectorial de Bolivia (SIRESE).

Simple como puedan parecer estos principios, es raro encontrar reguladores genuinamente independientes en muchos países latinoamericanos, particularmente en aquellos donde el poder ejecutivo tiene poderes discrecionales sobre la política económica. El padrinazgo político y la lealtad partidaria también pueden atentar contra la regulación independiente porque los gobiernos recién electos tienden a dar empleos con autoridad regulatoria como “recompensa” a amigos y militantes.

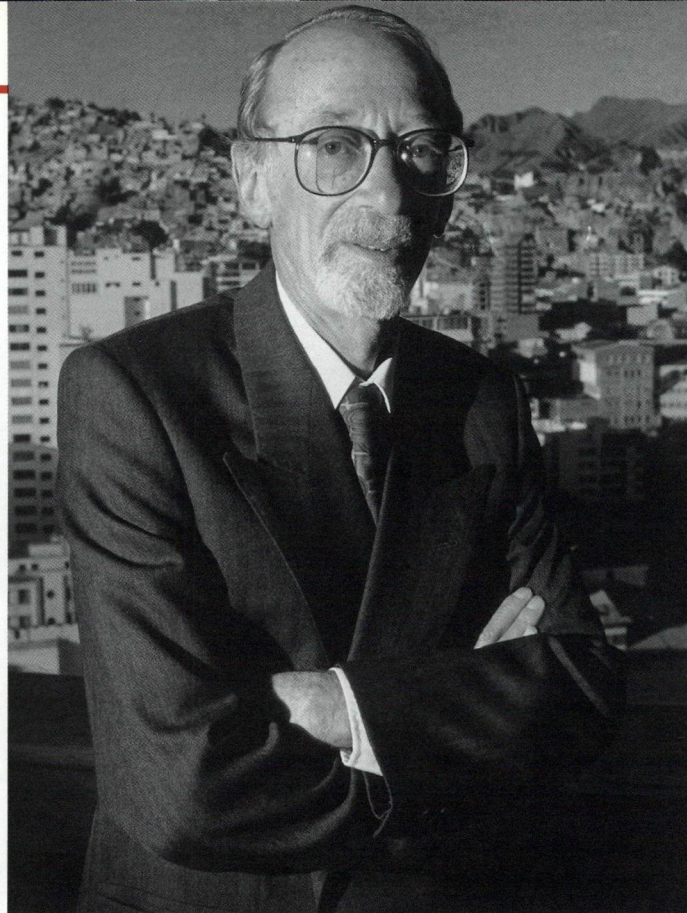
Aunque esos defectos hacen poca diferencia en economías dominadas por el estado, se convierten en verdaderos problemas en países donde está permitido que las fuerzas del mercado determinen los precios y la asignación de recursos. “Hasta hace poco, en muchos países la atención había estado puesta

en atraer inversión extranjera", dice William Savedoff, un economista del BID que estudia la regulación en el sector agua corriente. "Ahora la atención se está volcando en cómo se arman entidades regulatorias creíblemente autónomas".

Controles y equilibrios. El factor básico es la calidad de la legislación que crea un ente regulador y define sus poderes y responsabilidades. Si la legislación es preparada apresuradamente o por decreto, el ente regulador resultante tenderá a tener menos credibilidad que si la ley es concebida dentro del juego de demandas y concesiones implícito en el proceso legislativo. Si la legislación no delimita claramente las jurisdicciones que caben a los reguladores con las que corresponden a los ministerios y al sistema judicial, es probable que sus decisiones sean pasadas por alto por las partes interesadas, que apelarán a otras autoridades.

Asimismo, la legislación debe definir claramente la mecánica de designación de reguladores, las cualidades que deben tener, la duración de su mandato y la forma de financiar sus tareas. Según Besse, son factores cruciales. "Nuestra independencia política se debe al hecho de que el presidente debe elegir a cada regulador sectorial entre candidatos aprobados por dos tercios del Senado", explica. "Los reguladores prestan servicios por cinco o siete años, en períodos que no coinciden con elecciones, y no pueden ser removidos a menos que no cumplan sus funciones".

La autonomía financiera también es fundamental para mantener la independencia. El presupuesto de SIRESE, por ejemplo, está



“Si todos están descontentos y todos protestan mis decisiones, entonces... estoy haciendo un trabajo eficiente”.

Claude Besse

financiado por un pequeño gravámen a los ingresos de las empresas que regula. Alrededor de 70 por ciento de los ingresos de Indecopi son generados con multas aplicadas a empresas y un gravámen a las solicitudes de patentes y registro de marcas. Esas provisiones de autofinanciamiento aseguran que los presupuestos para operaciones de los entes reguladores no dependan de asignaciones anuales del Congreso, donde podrían exponerse a maniobras políticas.

Pero para ser efectivos, los entes regula-

dores también deben estar sujetos a reglas que limiten sus poderes. Además de circunscribir su jurisdicción mediante leyes, casi todos los países permiten que se apelen las decisiones de reguladores. Por lo general, las apelaciones no resueltas dentro del propio organismo regulatorio pasan al sistema judicial, donde un tribunal emite un dictámen independiente.

Para evitar conflictos de interés, muchos países restringen las actividades profesionales de los miembros de entes reguladores. Un funcionario que supervisa la banca, por ejemplo, debe tener vedadas actividades de asesoría para entidades financieras y no debe haber oportunidad de que sea tentado con ofertas de empleo de bancos que podrían aprovechar su experiencia y contactos. Para evitar tales abusos, en muchos países se imponen restricciones a los empleos que un regulador puede desempeñar durante e inmediatamente después de su período de servicio. En algunos casos se limita el número de años consecutivos que se puede ocupar un cargo regulatorio.

Pero en última instancia, la competencia e imparcialidad de los funcionarios depende de la vigilancia y el interés que ponga la sociedad. En las genuinas economías de mercado, como en partidos importantes de fútbol, ese celo está casi garantizado. "Cuando se tienen tres protagonistas diferentes (empresas, consumidores y gobierno) con diferentes agendas, deja de ser posible que un presidente designe a un amigo con tercer grado de educación como titular de un ente regulador", explica Savedoff. "Alguien se va a quejar".

—David Mangurian contribuyó a esta nota.

Un control de calidad para reguladores

La credibilidad e independencia de un regulador puede depender de estos factores:

- ✓ **Supervisión:** ¿Quién controla la labor del regulador? ¿Se pueden apelar sus decisiones ante otras entidades?
- ✓ **Mandato:** ¿Define la ley claramente la jurisdicción y autoridad del regulador? ¿Brinda al regulador las herramientas necesarias para hacer cumplir efectivamente las reglas?
- ✓ **Responsabilidad:** ¿Convoca el regulador a audiencias públicas antes de emitir un pronunciamiento? ¿Está obligado a divulgar sus dictámenes y presupuesto apropiadamente?

- ✓ **Financiamiento:** ¿El ente regulador se financia mediante derechos o gravámenes o depende de asignaciones anuales del Congreso?
- ✓ **Marco legal:** ¿El ente regulador fue creado por decreto o por legislación debatida por representantes electos?
- ✓ **Personal:** ¿Cómo se garantiza la competencia e imparcialidad de los reguladores? ¿Pueden ser despedidos sin causa por políticos? ¿Como se evitan los conflictos de interés?



El Centro de Convenciones de Cartagena y el histórico Muelle de los Pegasos atraen a turistas y empresarios todo el año.

Cartagena multifacética

La ciudad sede de la asamblea anual del BID refleja a América Latina en un microcosmos

Por SANTIAGO REAL DE AZUA

EL MERO NOMBRE CARTAGENA DE INDIAS evoca instantáneamente muchas cosas, no sólo a los casi 850.000 cartageneros y a sus compatriotas colombianos, sino a todo el mundo iberoamericano: alternativamente cuna de la cerámica americana, bastión de la corona española, puerto negrero, puerta de entrada hacia América del Sur, primera ciudad colombiana que proclamó su independencia de España, centro turístico y cultural, para no retener sino algunos aspectos de esta ciudad multifacética que en marzo será anfitriona de la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del BID.

Puerta, puerto, puente, Cartagena también es centro de irradiación cultural, una ciudad visual y musical por excelencia. Algunos de los colombianos más ilustres, empezando por el Premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez, la han hecho suya, y aunque a veces no sean particularmente proclives a hablar de ella, sus obras o sus personajes lo hacen por ellos.

Bajo su poético nombre, Cartagena, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad

por la UNESCO, encierra una realidad diversa, fuente de legítimo orgullo para Colombia y también un microcosmos de los más acuciantes desafíos que enfrenta toda nuestra región. Su condición de puerto caribeño pareció desde su fundación en 1504 destinarla a ser un punto de encuentro y difusión, vocación a la que el BID se asoció decisivamente desde la década pasada, contribuyen-

UNA AGENDA LLENA

Más de 2.500 participantes de todo el mundo asistirán a la trigésimo-novena reunión anual de gobernadores del BID, del 16 al 18 de marzo en Cartagena.

Antes de esa asamblea, el Banco realizará cuatro seminarios sobre:

- ▶ Programas sociales y participación ciudadana.
- ▶ Construcción de sociedades pacíficas.
- ▶ Inversiones y mercados emergentes.
- ▶ El desempleo en América Latina.

En coincidencia con la reunión del Banco también se celebrará la décimo-tercer asamblea anual de la Corporación Interamericana de Inversiones del BID.

do a financiar el Centro de Convenciones de la ciudad, que la ha convertido en uno de los principales centros de conferencias internacionales de las Américas.

El Centro de Convenciones, ubicado frente al Muelle de los Pegasos, donde llegaban los barcos cargados de esclavos, ofrece infraestructura y servicios para reuniones de hasta 5.000 personas, con la más moderna tecnología y enriquecido con obras de los mayores artistas colombianos.

"En ese entonces teníamos una infraestructura muy limitada", recuerda Moisés Álvarez, director del archivo histórico de Cartagena y memoria viva de la ciudad, al evocar la inauguración del Centro en 1982. "No teníamos empresas especializadas, aquello fue todo un reto", agrega. El Centro marcó el punto de partida de una nueva vida para la ciudad, que con la sucesión de reuniones de la importancia de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados y de la Conferencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo, ha ido acumulando experiencia y desarrollando servicios para sus visitantes.

El alcalde de Cartagena, Nicolás Curi, quien ya ejerció funciones en la década pasada, aguarda con calma la reunión del BID, a la cual considera tanto un honor para la ciudad como una oportunidad para mostrar a la comunidad financiera internacional las inmensas necesidades de "la otra Cartagena". Y es que junto a la admirablemente preservada ciudad vieja, con sus casas señoriales y calles recoletas, a los modernos rascacielos de Bocagrande y a las mansiones de Manga, hay otra ciudad cuyos problemas están en el corazón del desarrollo latinoamericano y, por ende, muy presentes en la agenda de los gobernadores del Banco.

Una visita a la zona suroriental de Cartagena ilustra mejor que nada a qué se refieren los cartageneros: al borde de la Ciénaga de la Virgen, donde se vierte 60 por ciento de las aguas servidas de la ciudad, viven miles de personas en condiciones dramáticas de insalubridad, miseria, y desamparo. Unos 250.000 cartageneros padecen condiciones de "pobreza crítica". Las 200.000 personas que viven en la zona suroriental cuentan con un solo hospital, que atraviesa por una profunda crisis económica. Los niños que tienen la fortuna de frecuentar una escuela lo hacen a menudo en aulas decrepitas y superpobladas. El alcalde menor de la zona nos da cuenta de una escuela con sólo 10 maestros para 700 alumnos.

Cartagena, considerada en su conjunto, sigue siendo una de las ciudades más pobres de Colombia, pero también es la que mayores progresos ha logrado en los últimos años en el campo educativo y del saneamiento.

La paradoja de esas múltiples caras convierte a Cartagena en un lugar particularmente propicio para eventos como la reunión anual del BID. Por un lado, ofrece un marco histórico excepcional y las más modernas instalaciones para facilitar el trabajo de los expertos, a lo que se suma su hospitalidad. Por el otro, les recuerda a los asistentes que su misma dualidad y diversidad se vinculan con la misión y la agenda del Banco: desarrollo sostenible, prioridad a la lucha contra la pobreza, integración social y cultural. En todos estos frentes, Cartagena quiere aprender y tiene mucho para enseñar.



Muchos cartageneros luchan para vivir.

Préstamos del BID reflejan una nueva América Latina

Ya no basta con hablar con órganos de gobierno

EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO aprobó créditos por 6.017 millones de dólares en 1997, según un informe presentado ante el Directorio Ejecutivo del Banco el 18 de diciembre. Los desembolsos alcanzaron a 5.468 millones de dólares durante el año, constituyendo un récord para el BID.

Tanto esas elevadas sumas como los tipos de proyectos apoyados por el Banco reflejan los cambios fundamentales operados en América Latina y el Caribe y cómo el BID responde a las necesidades de la región, afirmó el presidente del Banco, Enrique V. Iglesias, en su presentación a los directores.

Iglesias, quien comenzará su tercer mandato al frente del Banco en abril, dijo que durante el resto de esta década los esfuerzos de desarrollo de los países que sirve el BID estarán concentrados en la consolidación de la gestión macroeconómica y en las llamadas reformas "de segunda generación" como la modernización del estado, la reforma judicial y el fortalecimiento de la sociedad civil y las instituciones democráticas.

Los sectores tradicionalmente financiados por el Banco han cambiado profundamente en los últimos años. Los gobiernos están descentralizando sus operaciones y transfiriendo responsabilidades a niveles subnacionales, especialmente en el campo de la infraestructura física y el suministro de servicios sociales. Al mismo tiempo, el sector privado está cumpliendo tareas que antes se reservaba el estado. Un ejemplo citado en el informe de Iglesias es el de las obras sanitarias. Años atrás, el financiamiento de un proyecto de agua potable suponía un simple diálogo entre el Banco y una dependencia pública. En la actualidad tales emprendimientos son llevados a cabo por empresas privadas o mixtas que se financian mediante las tarifas que les cobran a los consumidores. Como resultado de ese cambio, el círculo de actores se ha ampliado y deben tomarse en cuenta una serie de factores técnicos, económicos, políticos y sociales mucho más complicados.

Ahora, antes de que el BID pueda financiar un proyecto, debe abrir un diálogo entre las partes involucradas, apelando a seminarios y conferencias que congregan a la gente de los sectores público y privado y de la sociedad civil.

Nuevos campos a financiar. Otra razón para pasar de grandes préstamos a grandes números de proyectos es el tipo de áreas en que

se está adentrando el Banco y que no necesariamente involucran préstamos.

Esas actividades van desde el entrenamiento de funcionarios públicos hasta programas para ayudar a las comunidades a construir sociedades pacíficas después de un conflicto civil. En cada caso requieren un considerable trabajo preparatorio para diseñar nuevas metodologías y la medición del desempeño con aportes no sólo de los gobiernos sino de organizaciones populares.

Aliento a los programas sociales. Del volumen de préstamos aprobados el año pasado, 44 por ciento financiará programas sociales, especialmente en las áreas de salud y educación. Varios proyectos para la pequeña y la microempresa, grandes generadoras de empleo en la región, obtuvieron financiamiento por 521 millones de dólares. También se aprobaron 320 millones de dólares en préstamos para proyectos del sector privado sin garantías gubernamentales, complementados por 566 millones de dólares en créditos sindicados.

Entre las innovaciones del año figuran el primer proyecto de garantía de riesgo para operaciones del sector privado; los primeros préstamos al Perú y Ecuador para prevención y mitigación de daños causados por El Niño; y el primer programa bilingüe de reforma judicial, diseñado para mejorar los servicios legales en comunidades rurales aisladas del Perú; un proyecto del Sistema Nacional de las Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela; financiamiento para el primer gasoducto independiente de México y las primeras reducciones de deuda bajo la iniciativa internacional para ayudar a países pobres y muy endeudados.

EL AÑO EN NUMEROS

6.017 millones de dólares en préstamos aprobados para un total de **99** proyectos.

5.468 millones de dólares en desembolsos, un récord.

320 millones de dólares en créditos para el sector privado, y **566 millones de dólares** en créditos sindicados.

77 millones de dólares para **318** proyectos de cooperación técnica.

61,6 millones de dólares del Fondo Multilateral de Inversiones para **47** proyectos.



Carlos Alvarez (der.), de Uruguay, describe un plan de negocio a otros jóvenes empresarios en la conferencia de Buenos Aires.

Soluciones jóvenes contra el desempleo

Propuestas atraen el interés de donantes

EL CAPITAL INTELECTUAL, ESA COMBINACIÓN de ideas, talento y energía requerido para iniciar y mantener en marcha una empresa, abunda entre la juventud sudamericana.

Esa fue la conclusión de un encuentro celebrado en noviembre en Buenos Aires, donde jóvenes de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y Bolivia presentaron 85 propuestas de negocios que podrían generar ingresos y empleos con pequeñas inversiones iniciales.

Este "Primer Foro de Jóvenes de Mercosur, Bolivia y Chile: Alternativas al Desempleo Juvenil" fue organizado por personas que participaron en una conferencia de la juventud que el BID convocó en Israel en 1995 y por la delegación juvenil que el BID envió a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1996. El Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), un centro de estudios auspiciado por el BID, y el Programa de Extensión y Desarrollo Juvenil del Banco fueron los anfitriones del encuentro.

En vez de pasar revista a las bien conocidas causas de desempleo en la región, el foro examinó soluciones prácticas a este problema, concebidas por los propios jóvenes. Específicamente, el encuentro buscaba elegir proyectos innovadores y bien estructurados para presentarlos a empresas, organizaciones no gubernamentales y organismos de gobierno que pudieran estar interesados en aportar el financiamiento inicial.

Las propuestas, escogidas por un panel

de especialistas en cada país participante, ofrecen un vívido testimonio de la creatividad e ingenio de la juventud de la región.

► Tres participantes bolivianos presentaron un plan para expandir un sistema de cultivo hidropónico que puede producir alimento nutritivo y barato para animales todo el año en altiplanicies áridas. El sistema demostró que puede producir 12 toneladas de forraje al año en un vivero de 32 metros cuadrados, un rendimiento seis veces superior al de una hectárea de pastura tradicional, con mucha menos agua.

► Una joven de 19 años propuso ampliar una escuela de cocina y administración gastronómica que opera como cooperativa para jóvenes de bajos ingresos en la provincia argentina de Santa Fe.

► Un consultor de microempresas de 28 años presentó planes para capacitar a jóvenes en técnicas de procesamiento de carnes en Santiago. El curso apunta a satisfacer la demanda de carniceros calificados que existe en supermercados chilenos, donde las ventas de carne han aumentado notablemente debido a la liberalización del comercio y al aumento de los ingresos familiares.

Representantes de la filial argentina de Microsoft Corp., una de las empresas que auspiciaron el evento, manifestaron interés en financiar varias propuestas locales. Igual voluntad expresaron la Fundación Kellogg y la Fundación Antorchas, ambas de Buenos Aires. La Agencia para la Asistencia Técnica del gobierno alemán demostró interés en varias propuestas presentadas por jóvenes

bolivianos, mientras que representantes del BID en Chile y Paraguay prometieron examinar las posibilidades de financiar propuestas en ambos países. El director regional del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola prometió considerar dar financiamiento para proyectos que puedan crear empleo para la juventud rural.

El presidente del BID, Enrique V. Iglesias, congratuló a los participantes por su creatividad y ambición y dijo que el Banco se compromete a apoyar a jóvenes empresarios con recursos financieros y logísticos, como también con su capacidad de movilizar cooperación de otras instituciones internacionales. Iglesias encomió a los participantes por la vocación de solidaridad social evidente en los objetivos de casi todas las propuestas, apuntando que esos valores están actualmente "en un estado de crisis" y deben ser cultivados para que tenga lugar un genuino desarrollo. Más específicamente, Iglesias prometió el apoyo del BID, en forma de equipos, para una propuesta que beneficiará a orfanatos en la ciudad boliviana de Potosí.

Para más información sobre los proyectos, diríjase a Fabián Koss, coordinador de asuntos juveniles del BID, al teléfono (202) 623-3097 o por correo electrónico a fabiank@iadb.org



Energía juvenil en la granja.

Remedio casero para la economía

Según el economista jefe del BID, Ricardo Hausmann, América Latina emergió relativamente indemne de la crisis que azotó el año pasado al sudeste de Asia gracias a su "sistema inmunológico más fuerte", reforzado por las reformas bancarias y financieras que emprendieron los países de esta región. En su presentación ante los ministros de finanzas de las Américas realizada en diciembre en Santiago de Chile, Hausmann dijo que aunque América Latina todavía puede ser afectada por los coletazos de la crisis asiática, estará en buena posición para recuperarse porque sus sistemas e instituciones son sólidos.

Alivio para la deuda de Guyana

Luego de Bolivia, Guyana es el segundo país de las Américas en recibir alivio de deuda bajo la Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados. El aporte del BID equivaldrá a 48,1 millones de dólares a valor actual, la mayor contribución entre las instituciones financieras multilaterales.

Brasil busca ecoturistas

Las autoridades brasileñas anunciaron el lanzamiento de un programa de 200 millones de dólares para desarrollar el ecoturismo en la Amazonia. El proyecto, anunciado en diciembre durante una conferencia internacional celebrada en Río de Janeiro, está siendo preparado con un préstamo del BID de 10 millones de dólares. El programa incluirá financiamiento para trabajos de infraestructura y expansión de las facilidades para ecoturismo.

Impulso a un banco regional

Los presidentes de cinco países centroamericanos asistieron el 19 de enero a la inauguración en Tegucigalpa de la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica, construida a un costo de 20 millones de dólares. El banco, que en el pasado reflejó las dificultades de una región asediada por conflictos civiles y turbulencia económica, es ahora "un nuevo banco, para una nueva América Central, en un nuevo siglo", dijo su presidente, Manuel Pacas Castro. El presidente del BID, Enrique V. Iglesias, quien asistió a la ceremonia, firmó los documentos de un préstamo de 100 millones de dólares al BCIE que serán destinados a financiar pequeñas y medianas empresas.



Chang-Díaz (segundo de la izq.) y el presidente de Costa Rica, José María Figueres.

Centro tecnológico lleva nombre de astronauta

Impulso a la alta tecnología en Costa Rica

COSTA RICA DIO OTRO PASO HACIA UN FUTURO de microprocesadores y modems al inaugurar el 1 de diciembre el Centro Nacional para la Alta Tecnología en San José.

El nuevo centro, al cual ingresarán sus primeros estudiantes este año, ayudará a satisfacer la creciente demanda de trabajadores especializados para centros de investigación y de producción de tecnología avanzada.

La Intel Corporation, por ejemplo, basó en gran medida su decisión de construir aquí una nueva planta de producción de microprocesadores a un costo de 300 millones de dólares en el alto nivel educativo de la población (ver EL BID, junio 1997).

El nuevo centro lleva el nombre de Franklin Chang-Díaz, científico y astronauta nacido en Costa Rica (ver recuadro). La ceremonia inaugural fue parte de la celebración del día en que Costa Rica abolió sus fuerzas armadas.

El edificio que sirve de sede del nuevo centro pertenecía a la Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno estadounidense y fue donado al gobierno de Costa Rica. Ahora está siendo renovado y equipado con financiamiento del BID, otras organizaciones y empresas de alta tecnología, entre ellas Microsoft, DSC, Motorola, Acer, Intel y Sawtec.

El instituto cuenta con instalaciones para enseñar ciencias de los materiales, procesos avanzados de manufactura, biotecnología, ingeniería genética, y ciencias de la informática y de la computación. Su administración estará a cargo de la Comisión Nacional de Educación Superior.

TRIBUTO MERECIDO

En su homenaje a Franklin Chang-Díaz, Costa Rica distinguió a un hijo que ha llegado a las mayores alturas de las ciencias, en más de un sentido.

Educado en Costa Rica y en Estados Unidos, Chang ha hecho avances pioneros en el campo de la física aplicada del plasma y en tecnología de fusión, incluyendo trabajos hacia un nuevo concepto de propulsión de cohetes basado en plasmas de alta temperatura confinados magnéticamente. En 1993 fue nombrado director del Laboratorio Avanzado de Propulsión Espacial en el Centro Espacial Johnson de la NASA. Chang, quien también ha trabajado como voluntario social para rehabilitar a drogadictos, ha hecho cinco vuelos espaciales desde que la agencia espacial estadounidense lo eligió para ser astronauta en 1980.

JOSE ANTONIO VENEGAS CORDERO

Nuevo enfoque para erradicar drogas

“¿QUEREMOS SEGUIR CULTIVANDO DROGAS O queremos seguir siendo indígenas?”

Esa es la pregunta que el antropólogo Carlos César Perafán-Simmonds espera que se hagan los indígenas de Colombia al enfrentar la cuestión de qué hacer con los cultivos ilícitos en sus tierras. Porque aunque los cultivos de coca, marihuana y amapolas son muy lucrativos, también socavan los valores tradicionales y la forma de vida de las comunidades indígenas.

Trabajar con comunidades indígenas

En un reciente seminario celebrado en la sede del BID, Perafán-Simmonds describió la forma en que la cultura tradicional indígena, su visión del mundo y la lucha por mantener su identidad, sugieren una estrategia para eliminar esos cultivos sin recurrir a medidas extremas o a costosos programas como la sustitución de cultivos o las compensaciones monetarias. Su presentación se basó en un estudio realizado en el marco de un proyecto financiado por el BID para apoyar a comunidades que han erradicado cultivos ilícitos en Colombia.

Se estima que 17 por ciento de los cultivos ilícitos en ese país se encuentran en reservas indígenas legalmente establecidas. Una porción mayor, pero no tan bien medida, crece en áreas indígenas que no han sido reconocidas legalmente.

A diferencia de lo que ocurre en Bolivia y en Perú, el cultivo de hojas de coca (el ingrediente básico de la cocaína) no es parte de la herencia cultural de la mayoría de los indígenas de Colombia. En realidad, en muchas áreas, los cultivos ilícitos no son plantados por las comunidades indígenas sino por colonos que entran en sus territorios, alterando la economía y el sistema de autoridad política tradicionales.

En total se calcula que 41 por ciento de los 638.600 indígenas colombianos, o casi dos terceras partes de las comunidades indígenas, son afectadas en alguna medida por cultivos ilícitos.

Al formular programas de erradicación, dice Perafán-Simmonds, se debe comprender que los indígenas en muchos casos ven vínculos entre eventos en términos de un marco lógico metonímico, según el cual los acontecimientos actuales son asociados con hechos acaecidos en el pasado sin necesidad de una relación causal. Si se cambiaran los eventos previos, a los que el antropólogo

denomina “nodos”, se facilitaría mucho convencer a los nativos de erradicar los cultivos ilícitos. Su trabajo de campo descubrió algunos de esos nodos que tienen inferencia para la formulación de futuros proyectos. Uno fue la eliminación en 1990 de un programa de crédito blando para la producción de cultivos comerciales. Cuando terminó ese financiamiento barato, muchas comunidades habían acumulado deudas que no podían pagar, abriendo un espacio para que los traficantes de drogas ofrecieran financiar cultivos ilícitos. El proyecto propuesto apoyaría programas prioritarios para fortalecer las economías comunitarias tradicionales.

Otras iniciativas protegerían la integridad territorial de las tierras indígenas, mediante la demarcación y la defensa de límites, o mudando a los colonos a otras partes. Otro proyecto subsidiaría el transporte fluvial, porque las ganancias que dejan los cultivos comerciales son insuficientes para comprar motores y combustible.

Las nuevas actividades no necesitan igualar el producido del cultivo de drogas, en la medida en que los nuevos ingresos se destinen al ahorro y la inversión, específicamente con el propósito de desarrollar la economía e identidad de las comunidades indígenas en vez de contribuir a socavarla.

Sinceridad financiera

Las normas contables más flexibles pueden resultar tentadoras para quienes buscan refugio del recaudador de impuestos. Pero para las economías de América Latina y el Caribe, tal falta de rigor en las cuentas tiene un alto costo. La región se ve forzada a pagar una sobretasa en el costo del capital porque sus normas contables están por debajo de los niveles aceptados internacionalmente, advirtieron expertos en contabilidad e inversores internacionales que asistieron a una conferencia en la sede del BID.

Desafío para los contadores

Países en todo el mundo están optando por una mayor franqueza financiera y normas contables más severas y uniformes. Una



Los indígenas de Colombia encuentran alternativas

de las razones es que en la economía globalizada, las normas universales se han convertido en un lenguaje común para los contadores, inversores y reguladores.

Aunque están de acuerdo en la necesidad de cambios, algunos reguladores latinoamericanos que asistieron a la conferencia apuntaron que ajustar las normas tendrá un costo elevado, que debe ser medido contra los beneficios de un régimen regulatorio más severo. Algunos panelistas predijeron que habrá resistencia de parte de empresas temerosas de que revelar más información resultará en más impuestos.

Los críticos de la falta de rigor contable en América Latina, incluyendo analistas del sector privado, señalaron una amplia gama de problemas. Algunos menores, como la tardanza en dar información y la falta de direcciones de correo electrónico y de números telefónicos en el Internet. Otros defectos más serios eran la falta de información financiera necesaria y normas contables confusas y diferentes dentro de un mismo país.

Dos economistas del BID, Kim B. Staking y Alison Schulz, advirtieron que a menos que la región mejore sus normas contables y de información financiera, tendrá “una desventaja comparativa en el acceso al capital, y se

Gobiernos centrales que optan por delegar

Las autoridades locales obtienen más autonomía y control del gasto

DESDE LA EPOCA COLONIAL, CUANDO España trataba de controlar su vasto imperio concentrando poder en un puñado de virreynatos, los gobiernos en América Latina han tendido a ser sumamente centralizados. Esa tendencia persiste todavía, a pesar de que las autoridades centrales han comenzado a ceder poderes a unidades administrativas menores, como las provincias y las municipalidades.

El gráfico al pie de esta nota ilustra uno de los indicadores más simples del grado de centralización en un país: el porcentaje del gasto público total efectuado por administraciones subnacionales. En promedio, en América Latina era sólo el 15 por ciento en 1995, comparado con el 35 por ciento en los países industrializados que pertenecen a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Hay excepciones: Brasil y Argentina han dado siempre más poder a las provincias, en parte porque el tamaño de sus territorios hizo extremadamente impráctica la centralización.

Durante la década pasada, el retorno de la democracia y del activismo cívico en toda la región ha desembocado en la elección de

gobiernos provinciales y municipales que están demandando más control de los recursos que afectan a sus electores locales. Como resultado, la región muestra una lenta pero inconfundible tendencia hacia la descentralización. Según un estudio efectuado por el BID, incluido en la edición 1997 de su informe *Progreso Económico y Social en América Latina*, entre 1995 y 1996 el porcentaje de gasto público controlado a nivel subnacional aumentó de alrededor de 34 por ciento a 50 por ciento en Argentina, de 33 por ciento a 40 por ciento en Colombia, de 3 por ciento a 10 por ciento en Perú y de 4 por ciento a 14 por ciento en Chile.

La descentralización afecta a algunos sectores más que a otros. Los gobiernos centrales han estado bastante dispuestos desde hace tiempo a ceder a las autoridades locales la recolección de basura, el mantenimiento de las calles y el transporte urbano. Ahora, hasta sectores como servicio de agua corriente, salud y educación están siendo gradualmente descentralizados. Pero los aeropuertos, las telecomunicaciones, los puertos y los ferrocarriles continúan mayormente en manos de la autoridad central.

as al cultivo de coca.

verá forzado a pagarlo a precio más alto". La desventaja será sentida especialmente por pequeñas y medianas empresas porque las firmas más grandes tienden a adoptar normas internacionales para poder captar capital en los mercados de valores de Estados Unidos y Europa.

Staking y Schulz dijeron que el BID está dispuesto a financiar a las firmas más pequeñas a hacer la transición.

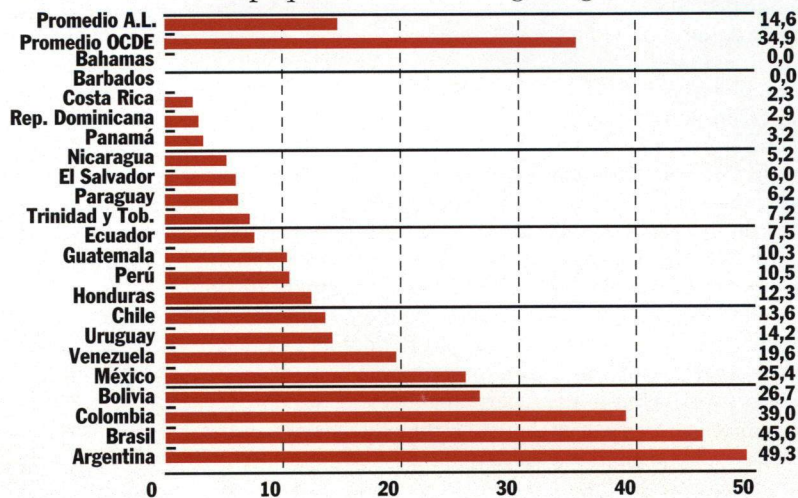
Muchas grandes compañías latinoamericanas cumplen ahora con las Prácticas Contables Generalmente Aceptadas (GAAP) de Estados Unidos porque es una condición para cotizar sus acciones en los mercados estadounidenses. Algunas firmas europeas también han adoptado las normas GAAP.

La Comisión Internacional de Normas Contables, entretanto, está desarrollando su propio código mundial de reglas. El secretario general de la comisión, Sir Bryan Carsberg, prometió en la conferencia que las nuevas reglas serán severas, inflexibles y uniformes. "Podrían causar dolor a los negocios acostumbrados a la flexibilidad", advirtió. Pero dijo que es "irresistible" el movimiento hacia tales reglas estrictas dado el creciente alcance internacional de los negocios.

—Por Daniel Drosdoff

¿Quién controla el dinero?

En la mayor parte de la región, gobiernos provinciales y locales administran sólo una pequeña fracción del gasto gubernamental total*



*El gráfico muestra el porcentaje de gasto público total controlado por gobiernos locales y provinciales.

Fuente: *Progreso Económico y Social en América Latina*. Informe 1997.

PROGRESOS



CARLOS CONDE-BID

Buscando gas en Bolivia

BRASIL-BOLIVIA

Gas natural para la integración

El BID contribuirá a financiar un gasoducto de 3.146 kilómetros que unirá los campos de producción en Bolivia con centros de consumo en Brasil, un proyecto que rendirá grandes beneficios económicos y ambientales.

Bolivia tiene abundantes reservas de gas natural, una fuente relativamente limpia de energía. La construcción del gasoducto abrirá un mercado de exportación que puede generar ingresos iniciales del orden de los 200 millones de dólares anuales, que eventualmente llegarían a 300 millones de dólares. Los ingresos por exportación de Bolivia son ahora del orden de unos 1.000 millones de dólares anuales.

Para Brasil, el proyecto resultará en un sustancial aumento de uso de gas natural, que ahora constituye sólo 2,4 por ciento de su consumo de energía.

En la actualidad, casi un tercio de las necesidades energéticas de Brasil son satisfechas por generación hidroeléctrica, pero las represas más económicamente viables ya están siendo aprovechadas y son muy altos los costos económicos y ambientales de construir nuevas plantas.

Hasta hace poco, las leyes

daban a la compañía nacional Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) el monopolio de la explotación, transporte e importación de gas natural. Pero recientemente el gobierno quedó facultado para delegar esas funciones en otras empresas públicas o privadas. El proyecto de gasoducto será llevado a cabo por la Transportadora Brasileira Gasoducto Bolivia-Brasil (TBG). La participación del gobierno brasileño en TBG, a través de Petrofertil, una subsidiaria de Petrobras, no excederá el 51 por ciento del capital de la compañía, lo cual dejará al menos 49 por ciento de las acciones en manos privadas.

El préstamo del BID de 240 millones de dólares contribuirá a cubrir el costo de construcción del gasoducto en el lado brasileño del proyecto. El gasoducto transportará gas natural desde Río Grande, en Bolivia, hasta Porto Alegre, con puntos intermedios de distribución en São Paulo, Curitiba, Florianópolis y otras ciudades.

El costo total del proyecto asciende a 1.670 millones de dólares. Otras fuentes de financiamiento son el Banco Mundial, la



CECILIA JACOBSON

El gasoducto unirá los yacimientos en Bolivia con ciudades en Brasil.

Corporación Andina de Fomento, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el Export-Import Bank de Japón y participantes y proveedores.

El gasoducto tendrá un diámetro de 32 pulgadas (unos 81 cm) en su sección inicial y de 16 pulgadas (unos 41 cm) en su sección final. Su capacidad total de transporte será de 30 millones de metros cúbicos diarios.

GUYANA

Un mejor lugar para estudiar

"Mucho tiempo tuvimos techo con goteras, ahora lo tenemos bien sellado", cantaban los estudiantes en la inauguración de la escuela primaria del pueblo guyanés de Stewartville. "Mucho tiempo usamos baldes, ahora tenemos un techo", continuaban.

Según un reciente informe en el periódico Guyana Chronicle, las cosas han mejorado en Stewartville, donde los adultos todavía recuerdan cuando asistían a clases en una ferretería abandonada. La nueva escuela, que tiene 273 estudiantes y 14 maestros, puede acomodar hasta 400 alumnos. Sus instalaciones incluyen biblioteca, cafetería y enfermería, además de las aulas y oficinas.

La inauguración de Stewartville fue una de la reciente serie de apertura de escuelas, resultado de un programa nacional financiado con ayuda de un préstamo de 46,4 millones de dólares del BID. El programa incluyó la construcción de 19 escuelas y la rehabilitación de otras 36. Asimismo, el programa contempla la capacitación de unos 1.000 maestros, el desarrollo de programas de estudios, la producción de libros de texto y el fortalecimiento del Ministerio de Educación.

En un segundo programa que el BID esperaba contribuir a financiar, los planes originales de construcción de escuelas fueron desechados porque se los consideró excesivamente modernos y costosos.

Las nuevas especificaciones reducirán los costos de edificación a la mitad, dice Charles T. Greenwood, el representante del BID en Guyana.



GUYANA CHRONICLE

Una nueva escuela aguarda.

CREDITOS RECIENTES

Las siguientes operaciones fueron aprobadas recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin).

Brasil

Un préstamo de 75 millones de dólares del BID y 300 millones de dólares en fondos sindicados para ITA Energética S.A. para construir, operar y mantener un proyecto hidroeléctrico privado en el sur del Brasil.

Un préstamo de 17 millones de dólares del BID y 19 millones de dólares en fondos sindicados para financiar un proyecto privado de expansión, operación y mantenimiento de una carretera de 60 kilómetros en el estado de Río de Janeiro.

Préstamos de 6,5 millones de dólares del BID y una contribución de 300.000 dólares como cooperación técnica para aumentar la disponibilidad de crédito para microempresarios de bajos ingresos.

Chile

Una contribución de 2 millones de dólares del Fomin al Centro de Productividad Industrial para mejorar la gestión tecnológica de pequeñas empresas.

Colombia

Un préstamo de 100 millones de dólares del BID para contribuir a mejorar la red de caminos secundarios a nivel departamental y para aumentar la capacidad de gestión de los departamentos en planeamiento y gestión vial.

Un préstamo de 60 millones de dólares del BID en apoyo de la consolidación y expansión del mercado de crédito municipal para el financiamiento de infraestructura urbana.

República Dominicana

Un préstamo de 32 millones de dólares para ayudar al sistema judicial a mejorar la eficiencia y transparencia en la adjudicación y registro de propiedades inmuebles.

Ecuador

Dos préstamos del BID por un total de 62 millones de dólares para facilitar el acceso a la vivienda a sectores de bajos ingresos.

El Salvador

Un préstamo de 34,06 millones de dólares del BID para financiar mejoras en la infraestructura social y económica en las municipalidades más pobres del país.

Guatemala

Una donación de 930.000 dólares del Fomin para fortalecer los mercados de capital desarrollando un registro de transacciones de títulos y valores.

Honduras

Un préstamo de 6,55 millones de dólares en términos concesionales para mejorar la calidad y alcance de la educación básica.

México

Un préstamo de 171 millones de dólares del BID para mejorar la educación secundaria en áreas rurales, empleando la televisión para superar las distancias.

Un préstamo de 23,4 millones de dólares del BID para alentar la comercialización de actividades orientadas a aumentar la eficiencia energética.

Un préstamo de 8 millones de dólares del BID para fortalecer la Comisión de Banca y Valores.

Una inversión de 4 millones de dólares del Fomin en un fondo de capital de riesgo que apoyará a pequeñas empresas que mejoren el medio ambiente.

¿NECESITA DETALLES?

Para examinar en el Internet **comunicados de prensa** sobre proyectos aprobados: www.iadb.org/prensa/releases.htm. Para ver **documentación de proyectos**: www.iadb.org/english/projects/projects.html. El Centro de Información Pública puede brindar **información adicional** llamar al 202-623-2096 o e-mail: PIC@iadb.org.

Nicaragua

Un préstamo de 50 millones de dólares en términos concesionales en apoyo de la cuarta fase de un programa para proveer infraestructura social básica a los sectores más pobres de la población.

Un préstamo de 40 millones de dólares en términos concesionales para aumentar la productividad de pequeños y medianos establecimientos agrícolas y contribuir a la competitividad del sector alimenticio y agrícola.

Panamá

Dos préstamos del BID por un total de 130,13 millones de dólares para el desarrollo sostenido del sector financiero.

Un préstamo de 2 millones de dólares a largo plazo del Fomin y una contribución de 250.000 dólares como cooperación técnica para Multi Credit Bank, Inc. para dar crédito a microempresas y pequeñas empresas.

Una contribución de 1,2 millones de dólares para la comisión nacional de valores, con el propósito de fortalecer la banca, aumentar la diversidad del sector financiero y ampliar los mercados de capital.

Suriname

Una contribución de 1.830.000 dólares del BID para mejorar el sistema tributario y contribuir a armonizar la legislación impositiva del país y sus regulaciones con otros países de la Comunidad Caribeña.

Venezuela

Un préstamo de 8 millones de dólares de la CII a Inversiones Selva, C.A., para aumentar su capacidad de mejorar su eficiencia operativa y productiva en plásticos descartables.

Regional

Un préstamo de 240 millones de dólares del BID para la construcción de un gasoducto de 3,146 kilómetros de extensión que promoverá la integración energética de Brasil y Bolivia, diversificará fuentes energéticas y promoverá el crecimiento económico.



PESCA DEL DIA. Un trabajador de la Cooperativa de Pesca Santa Ana, Barú y Boca Cerrada muestra pescado fresco que venderá a hoteles y restaurantes en Cartagena. La Fundación Mario Santo Domingo usa fondos del BID para proveer entrenamiento y equipos a crédito a miembros de la cooperativa, de los que 20 por ciento son mujeres. La cooperativa reinvierte sus ganancias en educación, capacitación, servicios médicos y expansión.

Una financiación no reembolsable de 3.125.000 dólares en moneda local para desarrollo de tecnología agrícola y transferencia de tecnología en América Latina.

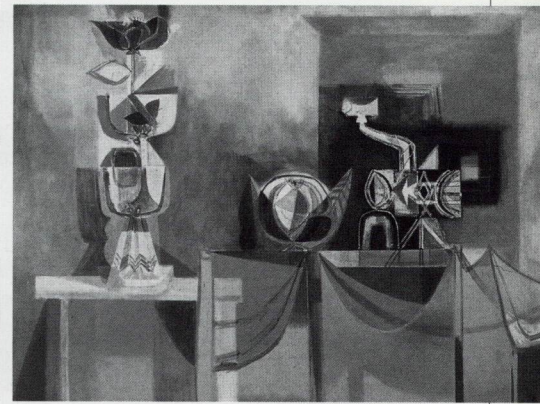
Una inversión de 3,25 millones de dólares del Fomin y una contribución de 1,75 millones de dólares como cooperación técnica también del Fomin para contribuir a establecer el Fondo de Desarrollo de Empresas, una organización no gubernamental que promoverá proyectos de preservación desempeñados por

microempresas y pequeñas empresas en América Latina y el Caribe.

GACETA

Bonos

Emisión de bonos por 150.000 millones de liras (unos 85 millones de dólares) en Euronotas de Mediano Plazo del BID. J.P. Morgan, Banca Nazionale del Lavoro, Sanwa y Goldman Sachs encabezaron la operación, colocada a un precio de 100,908 por ciento. Los bonos vencen el 15 de enero del 2010.



"Calle en Cartagena", de Ricardo Gómez Campuzano (izq.), muestra la influencia de los posimpresionistas, mientras que "Naturaleza muerta en amarillo", de Alejandro Obregón, evidencia influencias de Picasso.

Un tardío florecer

La brecha generacional del arte colombiano

Por FELIX ANGEL

DADA LA REPUTACIÓN DE COLOMBIA como centro de innovación y excelencia artística, es fácil olvidar que sus pintores y escultores se incorporaron relativamente tarde a las principales corrientes estilísticas del siglo XX.

En realidad, sólo después de la Segunda Guerra Mundial un pequeño grupo de artistas colombianos comenzó a apartarse de los estilos figurativos tradicionales y a abrazar la abstracción. Cómo consumaron la separación y el enorme éxito que han disfrutado es el tema de una exposición de 35 pinturas y esculturas en la Galería de Arte del Centro Cultural del BID titulada "Puntos de partida en el arte colombiano contemporáneo".

La aparición relativamente tardía del arte colombiano se debió en parte a la geografía. Las cadenas montañosas que separan a sus provincias han creado distinciones culturales que el transporte moderno y las co-


municaciones no han terminado de borrar. Santafé de Bogotá, situada en las alturas de los Andes, ha recibido menos influencia de movimientos culturales internacionales que otras ciudades volcadas al comercio exterior, como Buenos Aires.

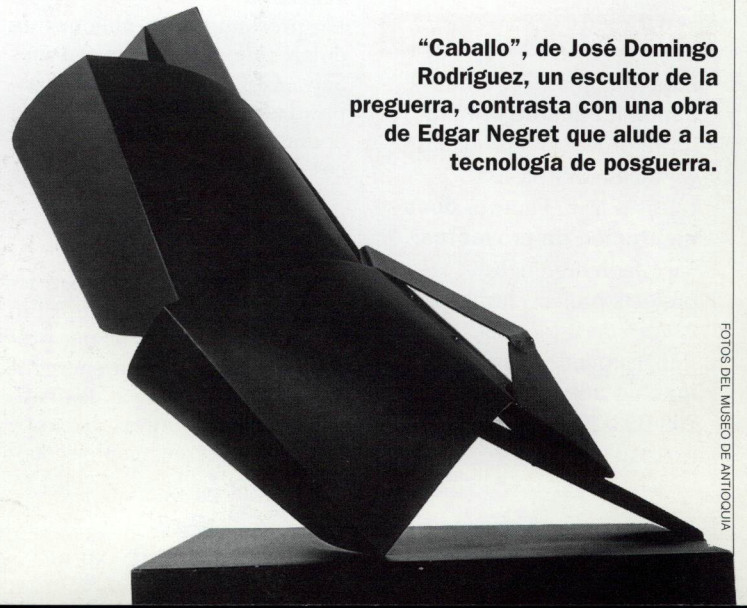
La provincia de Antioquia dio los primeros pasos en el mundo del arte moderno. En la década iniciada en 1920, la capital provincial, Medellín, que surgió como el principal centro industrial de Colombia, albergaba a varios sobresalientes escultores y muralistas. Pedro Nel Gómez, una figura renacentista, versado en muchas disciplinas artísticas tradicionales como también en arquitectura e

ingeniería, lenta y pacientemente introdujo nuevas ideas, influyendo el gusto de la nueva clase comercial e industrial que surgía en contraposición a las tradicionales fortunas agropecuarias.

Después, a comienzos de los años 1950, un grupo de artistas lanzó un movimiento que significaría la separación definitiva de la vieja generación. Tenían un importante aliado en Marta Traba, crítica de arte nacida en Argentina que alcanzó renombre internacional por su labor en acercar el arte latinoamericano a los ojos del mundo. Obstinada y enérgica, Traba se malquistó con algunos, pero ganó el respeto de muchos en la comunidad intelectual de Santafé de Bogotá.

De esa brecha generacional surgió una nueva energía artística y una diversidad de conceptos y estilos. Como lo demuestra la exposición de arte en el BID, tuvieron un rotundo éxito.

 Para más información vea el Internet: ww2.iadb.org/cultural/center1.htm.



"Caballo", de José Domingo Rodríguez, un escultor de la preguerra, contrasta con una obra de Edgar Negret que alude a la tecnología de posguerra.